

tege á los ciudadanos Licenciado Rafael Bracho y Pedro Peyró, contra la providencia de la Gefatura política, en cuya virtud se les aplicó el artículo de una ley que no se ha publicado en el Estado.

Devuélvanse las actuaciones al Juzgado de su origen, con copia certificada de esta sentencia; publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*S. Guzman.*—*L. Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 8 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

AMPARO

Promovido ante el juzgado de Distrito de Veracruz por D. Ramon Laimé, en representacion de la Junta de Caridad de esa ciudad, contra el Gobernador del Estado por la órden relativa á que continúen abiertos al culto público las capillas de Loreto y San Sebastian.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL

C. Juez de Distrito:

El promotor fiscal dice: que ha examinado detenidamente estos autos promovidos por el ciudadano síndico segundo del H. Ayuntamiento de esta Heroica Ciudad, bajo la direccion del C. Lic. José Gertrudis Pren, en representacion de la R. junta de

caridad, auxiliar del mismo H. cuerpo, solicitando de la justicia federal amparo y proteccion contra la órden del ejecutivo del Estado relativa á que vuelvan á abrirse como estaban, al culto público de los católicos, las capillas de San Sebastian y de Loreto, sin perjuicio del derecho que pueda tener la respetable junta en contrario, y que podrá deducir ante los tribunales competentes, porque segun expresa el quejoso, ese acto está comprendido en las fracciones primera y tercera del artículo primero de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, supuesto que viola en su representacion la garantía individual de que goza como poseedora y administradora de los hospitales á que están anexas dichas capillas; y que el ciudadano gobernador del Estado, ha invadido al dictarla, la esfera del poder federal.

Al mismo tiempo solicitó con calidad de urgente la medida de que se suspendiera inmediatamente el acto reclamado, y el juzgado tuvo por conveniente acceder, comunicando su decreto relativo, al ciudadano jefe político de este canton, que es la autoridad que debia ejecutar la órden superior; pidiéndosle tambien el informe justificado que previene la ley, el cual fué emitido, y en ese estado se han pasado al infrascrito las actuaciones para evacuar el traslado que le corresponde.

Para cumplir con los deberes de su encargo en este delicado negocio, debe manifestar previamente: que sin duda alguna el juzgado accedió á la solicitud del apoderado de la R. Junta de caridad, sobre suspension inmediata del acto reclamado, dando por lo mismo entrada al recurso, por considerar que era conveniente oír el informe de la Gefatura política para que lo ilustrara acerca de su procedencia, y despues con vista de antecedentes justificativos, resolver lo que fuere de justicia con audiencia del infrascrito promotor, bien sobre la procedencia del recurso, bien sobre el amparo que se ha pedido.

La respetable junta de caridad como

auxiliar del H. Ayuntamiento, ha debido obrar de acuerdo con él en asunto de tal magnitud y gravedad, para acreditar como apoderado al ciudadano síndico segundo ante el juzgado de Distrito, con el objeto de ejercitar la acción de amparo de que trata; y no habiéndolo hecho así, como consta del mismo poder y de la comunicación del referido H. cuerpo de fojas 37, en que manifiesta á la gefatura política que ningún conocimiento oficial tenía de la clausura de las capillas, es indudable que ha obrado así con entera independencia de aquel, y por lo mismo no tiene legal personería en este juicio, aun cuando se considerase que era caso de amparo.

Por otra parte, en su calidad de corporación municipal, según el concepto en que está comisionada para administrar los hospitales de caridad, no tiene mas atribución que las que le conceden los artículos 54, 55 y 56 de la ley orgánica expedida para la administración interior del Estado, número cuarenta y tres de 29 de Junio de 1861, y como en ellas no está comprendida la de comparecer en juicio, se debe entender que necesita el consentimiento del H. Ayuntamiento de quien depende inmediatamente; pero suponiendo por un momento que hubiese contado con la aprobación de su conducta, es evidente que en su calidad de corporación municipal que administra los hospitales de caridad correspondientes al municipio y no ha individuo alguno en lo particular, no tiene el derecho de establecer este juicio que no puede versar sobre ningún otro motivo que no afecte los derechos del hombre, ni de las autoridades, ni de los funcionarios ó empleados públicos, ni de las corporaciones civiles ó municipales, con arreglo al título primero, sección primera de la Constitución Federal, puesto que el artículo ciento uno y ciento dos de la misma, ordenan las cosas en que deben conocer los tribunales federales, y que la sentencia solo se ocupe de individuos particulares, de modo que no puede tomar en consideración

ninguna solicitud de amparo contra leyes ó actos que no afecten las garantías individuales de alguna persona en lo particular, ó no perjudique los derechos de esta en el sentido de las dos fracciones siguientes del artículo ciento uno de la carta fundamental de la República.

Es necesario, pues, que se sobresca en el pro edimiento del caso que ofrece la R. junta de caridad, porque los tribunales federales tienen expresa y terminante prohibición de ocuparse en las sentencias que pronuncian sobre el recurso de amparo y protección, de autoridades, funcionarios y corporaciones, siendo así que se les ordena que solo lo hagan de individuos particulares, que es la exclusiva base que sirve de fundamento á esta clase de juicios para hallar su legal procedencia, y según aparece de las actuaciones, ninguno de los que componen la respetable junta se queja por lo que resta á su individuo contra la orden librada por el ciudadano gobernador para la apertura de las capillas, ni mucho menos se puede considerar á los establecimientos de caridad con los derechos de individuos particulares, porque han sido creados en beneficio de la comunidad que está representada legalmente por la R. Junta de Caridad bajo la inmediata vigilancia del H. Ayuntamiento, quien á su vez necesita de la aprobación del superior gobierno del Estado en todos sus actos administrativos, conforme á las leyes vigentes.

En casos semejantes á este como son los amparos pedidos por los honorables ayuntamientos de México y de Pachuca, con motivo de la suspensión de sus funciones, decretada por la autoridad política, fueron denegados por la Suprema Corte de Justicia como improcedentes, pero el suscrito promotor es de parecer, que cuando el recurso es improcedente, no debe ser sentenciado en definitiva, sino que, ó no se le da entrada desde que se inicia si puede formarse juicio exacto de él, ó se sobresee en el procedi-

miento luego que, con mejores datos, se puede calificar su improcedencia.

Por estos fundamentos legales y en virtud de lo dispuesto en el artículo veintiocho y demas relativos de la ley de 20 de Enero de 1869, pide á vd. se sirva sobreseer en este juicio, por no ser procedente la acción que se intenta, y decretar en consecuencia que quede sin efecto el auto de 24 de Mayo próximo pasado en lo relativo á la suspension inmediata del acto reclamado; elevándose los autos á la Suprema Corte de Justicia para la correspondiente revision.

Heroica Veracruz, 4 de Junio de 1873.
—Lic. J. M. Lopez de Escalera.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Heroica Veracruz, Julio 2 de 1873.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Ramon Lainé, síndico segundo del H. Ayuntamiento, como apoderado de la R. Junta de Caridad de esta ciudad, con motivo de una Orden del C. Gobernador del Estado, previniendo se abran al culto público católico las capillas de los hospitales de Loreto y San Sebastian; los documentos acompañados por el quejoso al escrito en que interpone aquél recurso, así como tambien el testimonio de poder que le fué otorgado por la referida R. Junta de Caridad, para lo cual y en cuya representacion solicita el amparo de que se trata; el auto en que á petición de la parte y por la notoria urgencia del caso, se mandó suspender la ejecucion de la providencia reclamada; el informe emitido por el C. Gefe político de este Canton como autoridad ejecutora de dicha providencia, con mas los documentos que como parte de ese informe acompaña; las razones manifestadas por el Ministerio fiscal pidiendo el sobreseimiento en este juicio, á lo cual no creyó este Juzgado que debía acceder, porque existiendo la causa que lo motivó y gestionando sobre ella el quejoso,

carecia de todo fundamento legal dicho sobreseimiento; visto el auto de citacion para sentencia; los recursos de apelacion y denegada apelacion interpuestos por el C. Promotor y la parte, los que fueron declarados sin lugar por las razones expuestas en los autos en que fueron negados dichos recursos, con cuanto mas ver convino.

Considerando: que aunque por el testimonio de poder otorgado por la mencionada Junta al C. Lainé, así como por el curso de este se advierte de pronto; que en el presente caso se pidió el amparo para una entidad colectiva que, segun su organizacion, constituye una verdadera corporacion; que por tanto y segun la letra y espíritu de la ley sobre juicios de amparo en la parte segunda de su artículo segundo, que es el ciento dos de la Constitucion federal, el recurso no era procedente por no tratarse de garantías individuales violadas en particulares; que sin embargo de esto, dicho recurso no fué desde luego desechado, en razon á que expresándose en el escrito del quejoso estar comprendido el caso en las fracciones primera y tercera del artículo primero de la ley citada, este Juzgado creyó necesario oír el informe de la autoridad que debía ejecutar la providencia reclamada para adquirir el pleno convencimiento de si habia en efecto garantía individual violada en los miembros de la corporacion que lleva el nombre de Junta de Caridad, considerados como meros individuos particulares, segun lo terminantemente prevenido en la fraccion primera del artículo primero de la ley citada por el mismo promotor; que por otra parte, la lectura de las piezas que acompaña el C. Gefe político, confirma de una manera segura la creencia de que las garantías que aquí se dicen violadas lo serán respecto á la junta ó entidad colectiva, mas no como individuos particulares; que dicha Junta de Caridad es auxiliar del H. Ayuntamiento, con cuyo conocimiento debe sin duda obrar en sus determinaciones, sobre todo cuando importan al-

guna trascendencia, lo cual se deduce de las prescripciones que para su constitucion y atribuciones le señala el capítulo sétimo de la ley orgánica para la administracion interior de este Estado; que por lo tanto la mencionada junta debió obrar con anuencia del H. Ayuntamiento, para mandar cerrar las capillas referidas ó recabar su aprobacion despues de haberse ejecutado esa determinacion, lo cual no se verificó segun consta de una nota de dicho H. Ayuntamiento al C. Gefe político, en que dice no tener conocimiento oficial de la clausura de las capillas en cuestion; que la falta de este conocimiento oficial es tanto mas de notarse cuanto que entre los miembros de dicha junta se encuentra como Presidente de ella el que lo es del H. Ayuntamiento, un síndico y un regidor de este, los cuales por este solo hecho y sabiendo que la junta de caridad á que pertenecen está adscrita al H. cuerpo municipal de esta ciudad, por lo mismo oportunamente debió darse conocimiento á dicho cuerpo de los procedimientos de la junta.

Considerando igualmente: que esta no tiene facultad para constituir apoderados por si misma, pues debía limitarse á las atribuciones que le confiere la ley orgánica citada, y para hacerlo, debía haberlo verificado con consentimiento y aprobacion del H. Ayuntamiento, constando lo contrario en las diligencias de este juicio, lo cual importa tanto como no tener legítima personería el apoderado nombrado, y finalmente, que en casos semejantes en que sin ser procedente el recurso de amparo se ha sustanciado el juicio hasta definitiva, por exigirlo así sin duda la naturaleza y circunstancias de dichos casos, cuyos principios se ven sancionados por algunas ejecutorias de la Corte Suprema de Justicia y se han tenido aquí presentes, no como preceptos legales sino como doctrina de los jurisconsultos que tales principios han admitido; con cuanto mas ver y considerar convino, y de conformidad con las prescripciones de la ley de veinte de

TOMO IV:—PARTE II.

Enero de 1869 en sus artículos segundo, parte segunda, y 16 y los 101 y 102 de la Constitucion general de la República, definitivamente juzgando, fallo: Primero: La Justicia de la Federacion no ampara ni protege á la Respetable Junta de Caridad de esta Ciudad, contra la providencia del C. Gobernador del Estado que manda abrir al culto público Católico las capillas de Loreto y San Sebastian, imponiéndose á sus miembros el minimum de la multa designada en el artículo 16 anteriormente citado, y quedando sin efecto el auto de suspension. Segundo: Unase á estas diligencias un ejemplar de la ley orgánica de la Administracion interior del Estado, para que se tenga á la vista en la parte correspondiente, al hacerse la revision. Tercero: Notifíquese á las partes; sáquense las copias prevenidas por la ley para el periódico «El Progreso» y «Semanario Judicial de la Federacion» y elévense los autos originales á la Corte Suprema de Justicia.

Así lo mandó y firmó el C. Juez de Distrito del Estado. Lo testificamos.—*Lic. Luis Y. Gomez.*—De asistencia.—*José M. Gomez.*—*Vicente Simancas.*

Es copia fielmente sacada de sus originales, lo certifico. Hergica Veracruz, Julio 7 de 1873.—*Lic. Luis Y. Gomez.*—De asistencia.—*José V. Gomez.*—*Vicente Simancas.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia

México, Agosto 4 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Veracruz por D. Ramon Lainó, en representacion de la junta de caridad de esa Ciudad contra el Gobernador del Estado, por la órden relativa á que continuen abiertas al culto público las capillas de Loreto y S. Sebastian, y considerando: que como explícitamente reconocen así el gobierno del Estado de Veracruz como la

junta de caridad del mismo puerto, es facultad exclusiva del Gobierno Supremo de la Nacion, la de legislar en materia de culto, por lo que el Gobernador del expresado Estado se limitó á disponer en su providencia reclamada, continuaran abiertas al culto público las capillas de S. Sebastian y Loreto, como lo estaban antes de haberse mandado clausurar por la junta de caridad á cuya corporacion dejó á salvo todos sus derechos para que los dedujese ante el Gobierno Supremo de la Nacion, ó ante la autoridad que juzgue competente. Considerando: que la junta de caridad está sujeta al cuidado y vigilancia de la municipalidad, y que las determinaciones de esta corporacion se hallan sometidas al Gobierno del Estado, segun lo dispuesto en la ley orgánica del mismo. Considerando: que las capillas mandadas cerrar por la junta de caridad, estaban de tiempo inmemorial abiertas y dedicadas al culto público, en las que se celebraba misa para el pueblo en general, y otras diversas funciones que no pueden tener lugar en los oratorios privados conforme á las leyes vigentes. Se declara: Primero: se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 2 del próximo pasado por el Juez de Distrito de Veracruz, en la parte que declara que la Justicia de la Union no ampara ni protege á la R. Junta de caridad de esa Ciudad, contra la providencia del C. Gobernador de ese Estado, que manda abrir al culto público católico, las capillas de Loreto y S. Sebastian. Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José M. Iglesias.*—*Juan José de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Artega.*—*Pedro Ordaz.*—*Manuel de Castañeda y Ndjera.*—

Ignacio Ramirez.—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*José García Ramirez.*—*Ignacio Altamirano.*—*Luis María Aguilar,* secretario.

Es copia. México, Agosto 11 de 1873.
—*Lic. Enrique Landa,* oficial mayor.

CRIMINAL

Causa instruida en el Juzgado de Distrito de Guanajuato contra Don Trinidad Gonzalez, por circulacion de moneda falsa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en la noche del día 10 del mes próximo pasado, Trinidad Gonzalez entró á comprar medio de cigarros á la tienda llamada de la «Bolsa» al C. Pedro Munguía con un peso fuerte, que sospechando que era falso, lo enseñó el C. Munguía á su dependiente C. Jesus Luna, para que lo reconociera, y conociendo que era falso, se lo manifestaron á Gonzalez, que observando que llamaban á un agente de policía, corrió de la tienda poco perseguido por el dependiente, fué aprehendido por el guarda nocturno C. Dionisio Vargas. Este hecho motivó la formacion de la anterior acta, en la que está probada la existencia del delito de circulacion de moneda falsa con la certificacion judicial de la moneda, que Trinidad Gonzalez pretendió introducir al comercio, la calificacion que los peritos hicieron de ella, y las declaraciones de los Ciudadanos Pedro Munguía y Jesus Luna.

Estas mismas declaraciones demuestran la delincuencia del procesado, que aunque en su declaracion preparatoria y en su confesion con cargos, confesó el hecho tal cual se ha referido, se escepccionó diciendo, que al hacer uso del peso falso, creia que era